

Procedimiento : Ordinario
Materia : Despido Indirecto
Demandante : Rosalindo del Carmen Vargas Salinas
Demandado : Ilustre Municipalid de La Pintana
RIT : O-88-2020
RUC : 20- 4-0247390-9

San Miguel, cinco de julio de dos mil veintiuno.

Vistos, oídos y considerando:

PRIMERO: Que Pedro Ignacio Peña Sánchez, abogado, domiciliado en Avenida Las Condes N°11.380, oficina 91, comuna de Vitacura, en representación de **Rosalindo del Carmen Vargas Salinas**, maestro jardinero, domiciliado para estos efectos Avenida Las Condes N°11.380, oficina 91, comuna de Vitacura, interpone demanda en procedimiento de aplicación general en contra de la **Ilustre Municipalidad de La Pintana**, representada legalmente por Claudia Gerlene Pizarro Peña, ambas con domicilio en Avenida Santa Rosa N°12.975, comuna de La Pintana, con el objeto que se hagan las declaraciones y se condene a la demandada al pago de las prestaciones que indica.

Fundando su pretensión señala que ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 21 de junio de 2004, mediante la suscripción de contratos de honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo e indica que las labores que desempeñó durante todo el periodo laboral, fueron con constantes aumentos de sus funciones y remuneraciones, hasta el momento del despido indirecto realizado el día 19 de noviembre de 2019.

Señala que durante todo el tiempo en que el demandado prestó servicios a favor de la demandada, trabajó como “Peoneta”, en el Departamento de Operaciones Ambientales, dependiente de la Dirección General de Gestión Ambiental, además de realizar otras funciones que no eran propias de su cargo, labores evidentemente habituales, no accidentales y genéricos en la Municipalidad de La Pintana, sujeto a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones.



Señala que los contratos celebrados con la demandada constituyen una abierta infracción a la legislación aplicable, pues corresponden a aquellos denominados “Contrato de Honorarios”, sin embargo, lo que existió fue una efectiva relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia conforme explica y detalla, dándose por íntegra y expresamente reproducida la demanda en lo pertinente.

Añade que los servicios se extendieron por 15 años, 4 meses y 29 días, realizando los mismos servicios bajo las características esenciales propias de un contrato de trabajo, en cometidos genéricos, permanentes en el tiempo y desplegados de forma ininterrumpida, resultando claro que las funciones que desarrolló el actor a favor de su ex empleadora no reunían las exigencias que para ello establece el artículo 4 de la Ley 18.883, norma excepcional que por lo demás debe ser interpretada en sentido estricto y restringido y que considera dichas exigencias para aceptar la existencia de un contrato de honorarios bajo dicha preceptiva y cita normativa aplicable en la especie.

Afirma que la relación laboral entre las partes de La Pintana terminó el día 19 de noviembre de 2019, conforme lo establece el artículo 171 inciso 4º del Código del Trabajo, por haber incurrido la empleadora en la causal contemplada en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, cumpliéndose las formalidades legales y detalla los incumplimientos que le atribuye a la demandada para luego explicar y detallar los índices de subordinación y dependencia que concurren en la especie, dándose por íntegra y expresamente reproducida la demanda en lo pertinente.

En cuanto a la remuneración del demandante señala que este percibía la suma de \$418.233.- mensuales, para cuyo pago se le exigía la confección de un informe de gestión que se adjuntaba a la boleta de honorarios, el que daba cuenta de las funciones desarrolladas por el actor durante el periodo correspondiente a la mensualidad señalada en la boleta y en mérito de lo expuesto y normas legales y jurisprudencia que invoca, solicita se condene a la demandada al pago de las prestaciones que consigna en el petitorio de su libelo pretensor.



SEGUNDO: Que la demandada contestando el libelo pretensor, solicitó el rechazo de este, en todas sus partes, con costas. Al fundamentar su defensa primeramente opone excepción de incompetencia absoluta del tribunal y de prescripción, habiéndose desestimado la primera en la audiencia preparatoria.

En cuanto al fondo, analiza la normativa que rige a los municipios y señala que la ley ha autorizado a las municipalidades la celebración de contratos de trabajo sólo respecto de dos situaciones, a saber, actividades transitorias en municipalidades que cuenten con balnearios u otros semejantes y, personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad.

Agrega que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 18.883, puede contratar a honorarios a determinadas personas, las que quedan sujetas a las reglas que establezca el respectivo contrato, sin estar afectas al Estatuto Municipal y menos a una normativa laboral, la que no se aplica en el ámbito de la Administración Pública y cita normativa y jurisprudencia aplicable en la especie.

Afirma que la legislación que regula la contratación a honorarios para los municipios, permite contratar de esa forma para cometidos habituales y no sólo para labores accidentales, siempre que se trate de cometidos específicos como ocurre en la especie en que el demandante fue contratado para desempeñar labores específicas para los programas que detalla, dándose por íntegra y expresamente reproducida la demanda en lo pertinente.

Señala que los contratos que se acompañarán en su oportunidad desvirtúan lo señalado en la demanda en cuanto se indica que el demandante empezó a prestar servicios desde el 21 de junio de 2004, ya que este ingresó a prestar servicios como honorario a la Municipalidad de La Pintana sólo a partir del 1 de enero del año 2010 y dado que existen contrataciones distintas, cada una de ellas con fines específicos, con periodos determinados en que debía realizar las funciones, no es posible determinar la existencia de continuidad de los servicios y cita normativa jurisprudencia aplicable en especie, dándose por íntegra y expresamente reproducida la demanda en lo pertinente.

Añade que el actor al demandar y solicitar prestaciones laborales solo cuando no se le renovó el contrato, durante toda la ejecución contractual



estuvo de mala fe, e indica que por años mantuvo una conducta por la cual manifestó su voluntad de ser contratado a honorarios para la Municipalidad sin reclamar antes que su vinculación estaba según él, regida por el Código del Trabajo, sin reclamar las prestaciones que de ello podrían derivarse y sin ejercer oportunamente las acciones para reclamar los presuntos derechos que le asistían, siendo culpable de su propia pasividad, en consecuencia, pretender que se le beneficie ahora de todas las prestaciones laborales que por su propia negligencia no solicitó antes, causa un tremendo perjuicio, existiendo de su parte un claro abuso del derecho.

Explica que la institución del auto despido es improcedente respecto de los servidores contratados a honorarios para un organismo público ya que la Municipalidad de La Pintana ha actuado siempre de buena fe y que, al ser un órgano público sólo puede hacer aquello que la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico le permiten, por lo que estaba impedida de pagar cotizaciones, escriturar un contrato de trabajo y otorgar un feriado legal, existiendo una presunción de legalidad a su respecto y cita jurisprudencia aplicable en la especie.

Explica que el autodespido solo es procedente respecto de una relación de servicios declarada como laboral y solo para el futuro, esto es, cuando ya exista la obligación real declarada de pagarse las cotizaciones previsionales y las demás obligaciones laborales.

Para el evento que se estime aplicable la institución del autodespido, afirma que no existen incumplimientos graves ya que ambas partes estuvieron de acuerdo en su inicio, en la suscripción de un contrato a honorarios, el que fue celebrado al amparo de un estatuto legal determinado lo que, en principio, le otorgaba una presunción de legalidad, amén de haber sido cumplido por el Municipio de buena fe, desde que realizó la retención de los impuestos, pero dado que ambas partes estaban de acuerdo en que se trataba de un contrato civil, sólo puede concluirse que procedió de buena fe al omitir la retención de una parte de la remuneración del actor para proceder al pago de sus cotizaciones previsionales, desde que aquellas eran incompatibles con la naturaleza del contrato suscrito.



En cuanto a la nulidad del despido señala que esta es improcedente por cuanto se trata de una sanción por no pago de cotizaciones previsionales respecto de las cuales dicha parte no tenía conocimiento anterior que debía pagar, conforme explica y detalla dándose por íntegra y expresamente reproducida la demanda en lo pertinente.

Agrega que el pago de las Cotizaciones Previsionales por todo el tiempo trabajado, es improcedente conforme explica y detalla y, en subsidio, ordena pagar las cotizaciones de cada mes con deducción del monto que represente la respectiva retención de impuestos, asimismo, señala que es improcedente el pago de remuneraciones hasta la convalidación del despido y cita jurisprudencia aplicable en la especie.

TERCERO: Que celebrada la audiencia preparatoria y fracasado el trámite de conciliación, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando los hechos a probar que constan en el acta respectiva la que, en lo pertinente, se da por reproducida para todos los efectos legales.

CUARTO: Que, en orden a acreditar los fundamentos de su pretensión, la parte demandante ofreció e incorporó en la audiencia de juicio la prueba documental, confesional, testimonial y exhibición de documentos singularizadas en el acta respectiva la que, para todos los efectos legales, se da por expresamente reproducida en lo pertinente, como asimismo las declaraciones que constan en el registro de audio respectivo.

Que, por su parte, la demandada incorporó la prueba documental y confesional singularizadas en el acta respectiva la que, para todos los efectos legales, se da por expresamente reproducida en lo pertinente, como asimismo las declaraciones que constan en el registro de audio respectivo.

QUINTO: Que el actor ha concurrido a estrados con el objeto que se declare que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral, afirmando haber prestado servicios para la Municipalidad demandada en calidad de peoneta, en el Departamento de Operaciones Ambientales.

Que el artículo el artículo 4° de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, dispone que:

“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando



deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se registrarán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

SEXTO: Que según consta de la prueba documental incorporada por ambas partes en la presente causa, el demandante prestó servicios para la demandada durante diversos periodos a contar del 21 de junio de 2004.

Que establecido lo anterior, corresponde determinar si en la contratación del demandante concurren alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 4° de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, que faculta a las municipalidades para contratar en base a honorarios las prestaciones de servicios que indica.

Que, primeramente, la norma antes referida faculta la contratación en base a honorarios de “profesionales y técnicos de educación superior”, sin embargo no consta de los antecedentes que el actor tenga dichos estudios y, por lo demás, según consta de las boletas de honorarios electrónicas incorporadas en esta causa, el demandante presta servicios de “Maestro Jardinero”.

Que, en segundo lugar, la norma en análisis faculta la contratación en base a honorarios de “expertos en determinadas materias” siempre y cuando se trate de realizar labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad”, cuestión esta que tampoco concurre en la especie ya que no consta de los antecedentes, y la demandada no ha invocado, la calidad de experto del demandante en alguna materia en particular y, por lo demás, conforme se ha señalado en lo que antecede el actor se desempeñó en programas que dice relación con la limpieza de la comuna, separación de residuos y mejoramiento y hermoseamiento de bienes nacionales de uso público, lo que constituye una labor habitual de los municipios, tal como se



desprende de lo dispuesto en el artículo 25 letra a) y c) de la ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece como obligación de la unidad encargada del medio ambiente, aseo y ornato, velar por “a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna” y “c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.”

Que tampoco concurre en la especie al tercera hipótesis contenida en la norma en análisis, esto es, que se trate de un extranjero que posea título en alguna especialidad que se requiera, ya que de la individualización del actor en la demanda y del mandato judicial aparejado al libelo pretensor, consta que el demandante es de nacionalidad chilena.

Que, finalmente, la norma del artículo 4° de la ley 18.883, faculta a los Municipios para contratar a honorarios la prestación de servicios para cometidos específicos, sin embargo, ello no consta de los antecedentes y, por lo demás, el propio representante del municipio al absolver posiciones en la causa reconoce que las labores del actor no eran específicas y variaban anualmente de acuerdo a las necesidades, explicando que estas se desarrollaban en dos grandes áreas, por una parte, mantención y áreas verdes y, por otra, aseo y recolección de basura. Por lo demás el carácter general de las labores desempeñadas por el actor queda de manifiesto con lo declarado por el testigo que depone esa parte, Rodolfo Naranjo Salazar, quien señala que el actor debía presentarse diariamente, en las mañanas, para que le asignaran las labores a realizar durante el día, explica que lo destinaban a realizar distintas labores, afirmando que el demandante hacía aseo y limpiaba, señala que cuando se detectaban focos de suciedad debían preocuparse de estos, limpiando y cargando los desechos en un camión.

Que, asimismo, testigo señala que registraban su asistencia y que tenían supervisores que cada cierto rato iban a verificar el trabajo que estaban desarrollando y si lo estaban ejecutando de manera correcta.

Que, por su parte, del legajo de boletas electrónicas incorporadas por el actor, consta que de forma mensual y regular percibía un estipendio por sus servicios.



Que, en consecuencia, atendido lo razonado en lo que antecede, esta sentenciadora ha logrado formar su convicción en el sentido que, en la especie, los servicios que el actor prestó para la I. Municipalidad de La Pintana constituyen una prestación de servicios bajo subordinación y dependencia, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo.

SEPTIMO: Que en cuanto a la extensión del vínculo laboral, si bien consta de la prueba documental incorporada por las partes, en especial de las boletas de honorarios emitidas por el actor, que éste prestó servicios para la demandada durante diversos periodos a contar del 21 de junio de 2004, solo logró acreditar que lo hizo en forma interrumpida a contar del 1 de enero de 2008, por lo que para todos los efectos legales se tendrá por establecido que el vínculo laboral entre las partes se inició en la fecha antes señalada.

Que en cuanto a la remuneración del actor, de las respectivas boletas de honorarios electrónicas, consta que durante el último año de prestación de servicios el demandante percibió un estipendio mensual ascendente a la suma de \$418.233.-

OCTAVO: Que en cuanto al término de los servicios del trabajador, conforme se expone en la demanda y se desprende de las cartas de aviso de término de contrato incorporadas en la audiencia respectiva, éste puso fin a la relación laboral que lo ligaba con la demandada, el día 19 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo en relación con el artículo 160 N°7 del referido cuerpo legal por haber incurrido la empleadora en incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, fundado en el no pago de cotizaciones de seguridad social, no escrituración del contrato y cumpliendo .

Que el artículo 171 dispone que “Si quien incurriere en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuere el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contados desde la terminación, para que este ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento en el caso de la causal del número 7...” y luego agrega en su inciso segundo que “El trabajador deberá dar los avisos a



que se refiere el artículo 162 en la forma y oportunidad allí señaladas”, norma esta de la que se infiere que el legislador ha establecido el procedimiento al cual el trabajador debe ceñirse en la manifestación de voluntad de no perseverar con el vínculo laboral, correspondiéndole además acreditar que su empleador incurrió en las conductas que le atribuye y que sirven de fundamento a la causal invocada.

Que conforme se desprende de la prueba documental aportada por la parte demandante, en especial de las comunicaciones referidas en lo que antecede, el trabajador cumplió íntegra y cabalmente las normas antes referidas toda vez que dio el aviso establecido en el artículo 162 del Código del Trabajo, remitiendo carta a su empleadora en la que le comunica su decisión de poner término a la relación laboral, indicando la causal invocada al efecto y los hechos en que ella se funda, comunicación esta que fue remitida por correo certificado, informando también el término de sus servicios a la Inspección del Trabajo, dando así el demandante cumplimiento a todas y cada una de las formalidades que le impone el artículo 171 para poner término al contrato de trabajo, dentro de los plazos establecidos en la ley.

NOVENO: Que conforme se lee de la carta de auto despido incorporada por la parte actora, el demandante imputa a su empleadora haber incurrido en los siguientes incumplimientos:

“1.- EL NO PAGO DE COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: respecto de aquellas correspondientes a A.F.P, Salud y Cesantía

2.- LA NO ESCRITURACION DE MI CONTRATO DE TRABAJO: pese a las numerosas solicitudes verbales para la escrituración de éste, vulnerándose por tanto la normativa contenida en el artículo 9° del Código del Trabajo.

3.- NO PAGO DE FERIADO LEGAL DURANTE EL PERIODO TRABAJADO, en conformidad con el artículo 67 del Código del Trabajo.”

Que en cuanto al no pago de cotizaciones de Seguridad Social, consta de los respectivos certificados que efectivamente el actor registra pendiente de pago el periodo en que prestó servicios para la demandada.

Que no obstante lo señalado precedentemente, debe tenerse presente que, en la especie, la demandada es un organismo público que debe ceñir su obrar al principio de legalidad, por lo que habiendo celebrado un contrato de



honorarios con el actor, se encontraba impedida de enterar cotizaciones de Seguridad Social, en consecuencia, la conducta que se le imputa emana de un mandato legal que no le permitía una actuación diferente, por lo que a juicio de esta sentenciadora la demandada no incurrió en el incumplimiento en análisis.

Que en cuanto a la no escrituración del contrato de trabajo, conforme se ha razonado en lo que antecede, efectivamente la demandada incurrió en dicho incumplimiento, toda vez que utilizó la figura del contrato de honorarios contemplada en el artículo 4º de la ley 18.883, respecto del demandante, quien no se encontraba en ninguna de las hipótesis contemplada en la referida norma legal.

Que con relación al no pago del feriado legal durante el periodo laborado, dicho incumplimiento no ha sido suficientemente acreditado en esta causa toda vez que el demandante, al absolver posiciones, afirma que la demandada le otorgaba vacaciones.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Código del Trabajo toda prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación, como ocurre en la especie, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, el que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del mismo cuerpo legal, es de carácter consensual, sin perjuicio de la obligación de escriturarlo establecida en la misma norma legal.

Qué conforme se ha señalado en lo que antecede, entre las partes existió una relación de carácter laboral, por lo que la demandada al no haber escriturado el contrato de trabajo dándole la apariencia formal de una prestación de servicios a honorarios, no sólo incumplió la obligación que impone el artículo noveno antes señalado, sino que también incurrió en un incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía este tipo de vínculo contractual, toda vez que privó al trabajador de obtener los beneficios propios del mismo.

Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que la demandada incurrió en la causal contemplada en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, al haber incurrido en un incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo habido con el demandante, por lo que se dará lugar a la demanda en cuanto por ella se pretende el pago de la indemnización sustitutiva



del aviso previo e indemnización por años de servicio, debiendo incrementarse esta última prestación en un 50% de recargo legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del mismo cuerpo legal.

DECIMO: Que, asimismo, el actor solicita se condene a la demandada al pago de las cotizaciones de seguridad social correspondientes al período demandado, aplicándose además a la empleadora la sanción contemplada en el artículo 162 inciso 5° y siguientes del Código del Trabajo.

Que habiéndose establecido en lo que antecede que el vínculo que unió a las partes era de carácter laboral, se acogerá la demanda en cuanto por ella se pretende el pago de cotizaciones de seguridad social, en los términos que se señalará en lo resolutivo de esta sentencia, debiendo calcularse las mismas en base a la remuneración percibida por el actor en los respectivos periodos mensuales, consignados en las boletas de honorarios correspondientes.

Que en cuanto a la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 162 antes referido, es menester tener presente que la sanción antes referida ha sido prevista y establecida por el legislador para aquel empleador que, habiendo efectuado las retenciones correspondientes a cotizaciones de seguridad social de las remuneraciones de su dependiente, no entera los fondos en los organismos previsionales respectivos, incumpliendo con su rol de intermediario y distrayendo dineros que no le pertenecen, cuestión esta que no acontece en el caso sub lite, en que la existencia de una relación laboral entre las partes, sólo ha sido reconocida en esta sentencia, no habiéndose efectuado, en consecuencia, retención alguna por parte de la demandada para efectos previsionales.

Que, en este sentido, consta de la prueba documental y, en especial de las boletas de honorarios incorporadas esta causa, que las partes suscribieron contratos de prestación de servicios a honorarios y, bajo el amparo del mismo, la municipalidad demandada efectuó las retenciones de impuestos correspondientes, mas no retenciones para efectos previsionales, toda vez que a la luz de los referidos contratos ello no correspondía, ya que conforme se ha señalado la real naturaleza del vínculo habido entre ambas ha sido establecida sólo en la presente sentencia.



Que, a mayor abundamiento, debe tenerse presente que los contratos del actor fueron suscritos por el ente edilicio en virtud de la facultad que le confiere el artículo 4° de la ley 18.884, estatuto jurídico que les otorga una presunción de legalidad, encontrándose impedida la demandada de efectuar descuentos para efectos previsionales.

Que, en consecuencia, en la especie se trata de una situación distinta a la prevista por el legislador para la aplicación de la sanción en análisis, la que dada su naturaleza es de derecho estricto, por lo que se rechazará la demanda a su respecto.

UNDECIMO: Que el demandante solicita el pago de 326 días de feriado legal, prestación esta que será desestimada por esta sentenciadora toda vez que el actor reconoce al absolver posiciones que cuando cumplían un año les otorgaban vacaciones, reconociendo expresamente que hizo uso del feriado correspondiente a los dos últimos años, esto es, 2017 a 2019.

Que atendido lo razonado y resuelto en lo que antecede, no se emite pronunciamiento con relación la excepción de prescripción opuesta por la demandada respecto del feriado legal.

Que en cuanto al feriado proporcional reclamado por el trabajador, atendido lo dispuesto en el artículo 73 inciso segundo del Código del Trabajo y no habiendo acreditado la empleadora, durante la secuela del juicio, el pago de dicha prestación, se acogerá la demanda a su respecto.

DUODECIMO: Que la prueba ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica y los demás antecedentes probatorios, no obstante haber sido debidamente examinados, ponderados y analizados por esta sentenciadora, en nada alteran o modifican la convicción que se ha formado el Tribunal.

Y visto lo dispuesto en los artículos 7, 162, 168, 173, 453, 454, 456, 457, 459 y 461 del Código del Trabajo y ley 18.883, se resuelve:

I.- Que se acoge la demanda interpuesta en la presente causa, se declara que las partes estuvieron vinculadas por una relación laboral y, en consecuencia, se acoge la demanda de despido indirecto y se condena a la demandada **Ilustre Municipalidad de La Pintana**, representada legalmente por Claudia Gerlene Pizarro Peña a pagar al demandante **Rosalindo del Carmen Vargas Salinas**, las siguientes prestaciones:



1.- \$418.233.- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

2.- \$4.600.563.- por concepto de indemnización por años de servicio.

3.- \$2.300.281.- por concepto de 50% de recargo legal de la indemnización por años de servicio.

4.- \$184.718.- por concepto de feriado proporcional.

II.- Que las sumas ordenadas pagar deberán ser satisfechas con los reajustes e intereses contemplados en el artículo 173 del Código del Trabajo.

III.- Que, asimismo, se condena a la demandada a enterar en las instituciones correspondientes las cotizaciones de seguridad social del trabajador, correspondientes a todo el período laborado entre el 1 de enero de 2018 y el 19 de noviembre de 2019, prestación esta que deberán calcularse en la forma señala en el considerando décimo precedente y para cuyo efecto deberá accionarse en los términos del artículo cuarto de la ley de 17.322.

IV.- Que se rechaza en lo demás solicitado la demanda impetrada en esta causa.

V.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

VI.- Ejecutoriada esta sentencia cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día y, en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia para los efectos del artículo 466 del Código del Trabajo.

VII.- Asimismo, ejecutoriada esta sentencia devuélvanse los documentos incorporados en la presente causa.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

**PRONUNCIADA POR PATRICIA AGÜERO GAETE, JUEZ TITULAR DEL
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN MIGUEL.**



CXZTVGXQBJ